

-000059-

*Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN

HONORABLE PLENO:

La Comisión de Relaciones Exteriores de este alto Organismo del Estado, recibió por conducto de la Dirección Legislativa del Congreso, el expediente que contiene la Copia Certificada de la Convención Interamericana sobre Extradición, suscrita en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, el 25 de febrero de 1981.

CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN.

Por las normas de la Convención, los Estados partes se obligan, en los términos que la misma contiene, a entregar a otros Estados partes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.

Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva, haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición ha sido cometido fuera del territorio del Estado requirente, se concederá la extradición siempre que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo consiguiente.

El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición es denegada por el Estado requerido, éste someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la decisión al Estado requirente.

Para determinar la procedencia de la extradición es necesario, según el texto de la Convención, que el delito que motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito, esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de privación de libertad por dos años como mínimo, tanto en la legislación del Estado requirente como en la del Estado requerido, salvo el principio de la retroactividad favorable de la ley penal.

Si se ejercita entre Estados cuya legislación establecen penas mínimas y máximas, la Convención establece que será necesario que el delito materia del proceso, de acuerdo con la legislación del Estado requirente y del Estado requerido, sea posible de una pena intermedia de dos años de pena privativa de libertad; se considerará pena intermedia la semisuma de los extremos de cada una de las penas privativas de la libertad.

La Convención establece igualmente los casos de la improcedencia de la extradición, siendo principalmente:

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

- Cuando el reclamado haya cumplido la pena correspondiente o haya sido amnistiado, indultado o beneficiado con la gracia por el delito que motiva la solicitud de extradición, o cuando haya sido absuelto o se haya sobreseído definitivamente a su favor por el mismo delito:
- Cuando esté prescrita la acción penal o la pena, sea de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de extradición.
- Cuando el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser juzgado ante un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requirente.
- Cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política. El Estado requerido puede decidir que la circunstancia de que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito sea calificado como político.
- Cuando de las circunstancias del caso puede inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones de raza, religión, nacionalidad o que la situación de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos; y,
- Con respecto a los delitos que en el Estado requerido no puedan perseguirse de oficio, a no ser que hubiese querrela, denuncia o acusación de parte legítima.

La Convención establece igualmente que nada de lo dispuesto en ella podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo, cuando este proceda, así como que la nacionalidad del reclamado no podrá ser invocada como causa para denegar la extradición, salvo que la legislación del Estado requerido establezca lo contrario. Tratándose de condenados los Estados parte, podrán negociar entre sí acuerdos de entrega mutua de nacionales para que éstos cumplan sus penas en los Estados de su nacionalidad.

La Convención consta de un preámbulo y del articulado que forma su cuerpo, determinando estos últimos la obligación de extraditar, delitos que dan lugar a la extradición, jurisdicción, improcedencia de la extradición, delitos específicos, derecho de asilo, nacionalidad, enjuiciamiento por el Estado requerido, penas excluidas, transmisión de la solicitud, documentos de prueba, información supletoria y asistencia legal, principio de la especialidad, el principio "non bis in idem", detención provisional y medidas cautelares, etc., normas que complementan los artículos ya relacionados.

DOCUMENTOS APORTADOS Y COMENTARIOS.

El expediente contiene, además del texto de la Convención, opiniones que fueron requeridas oportunamente y que aparecen en la forma siguiente:

- Memorando 166 de fecha 17 de junio de 1981, procedente de la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

Expresa en el memorando el Ministerio de Relaciones Exteriores, que de la lectura de las cláusulas que comprende el instrumento jurídico internacional examinado, no se advierte que ocurran violaciones de normas de naturaleza constitucional, refiriéndose a la norma en vigencia en esa fecha, ni leyes de carácter interno, ya que si Guatemala ratifica la Convención incluye la amplia declaración oportunamente hecha por la delegación guatemalteca y que está transcrita en el documento. Sobre este aspecto se sugiere la posibilidad, indica el memorando, de que esa declaración se traduzca en una formal reserva especialmente aplicable al artículo 7 numeral 1 y fundamentada en el artículo 61 de la Constitución, en los términos siguientes:

"Guatemala se reserva el derecho de no entregar a ningún estado que reclame a nacionales para su juzgamiento o castigo, salvo que dicho Estado ofrezca reciprocidad sobre entrega de sus nacionales en casos similares. Sin embargo, a falta de tal ofrecimiento, se obliga a juzgarlos de conformidad con el artículo 8 de esa Convención".

Sobre el contenido de esta opinión, la Comisión estima necesario hacer ver que el contenido de la reserva, hace nugatoria la aplicación de la Convención, por lo cual la recomendación deja en mal la misma aprobación del instrumento internacional, el cual no sería aplicable, según la legislación constitucional vigente al momento de formularse el memorando y concluye la opinión indicando: *"En virtud de lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista jurídico no hay objeción para que Guatemala, formulando la reserva respectiva, ratifique la convención que se examina"*.

➤ Providencia 2346, 2479 y 2804 de fecha 25 de mayo, 1 de junio y 19 de junio de 1981, acompañadas de Nota T-45136 de fecha 29 de mayo de 1981 procedentes del Ministerio de Gobernación.

➤ Oficio 1388-arded de fecha 28 de septiembre de 1981, procedente de la Secretaría del Organismo Judicial.

Al igual como lo expresara el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el dictamen que se adjunta, suscrito por el ex Magistrado Apolo Eduardo Mazariegos Rodríguez, la Corte Suprema de Justicia, luego de las consideraciones formuladas, recomienda la misma reserva sobre la entrega de nacionales a otros Estados, indicando: ***"Finalmente, Guatemala puede ratificar dicha Convención, haciendo clara reserva de que no la aprueba, en lo que pudiera oponerse a la Constitución de la República, a las leyes constitucionales y al ordenamiento jurídico vigente en el país, al momento de realizarse el acto de ratificación y respetando siempre la costumbre y reciprocidad internacionales."***

➤ Nota 19202 de fecha 20 de noviembre de 1991, acompañada de dictamen jurídico procedente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, aprobado por su Junta Directiva.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

En su opinión, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, hace dos comentarios que por su importancia, es necesario destacar, en la forma siguiente: a) Indica que las disposiciones de la Convención no contravienen disposiciones del Código de Derecho Internacional Privado aprobado por la Convención de la Habana, Cuba, el 13 de febrero de 1928; b) Según el artículo 33 de la Convención, la misma rige para los Estados Partes que la ratifiquen o adhieran a ella y no dejará sin efecto los tratados multilaterales o bilaterales vigentes o concluidos anteriormente, salvo que medie, respectivamente, declaración expresa de voluntad de los Estados Parte o acuerdo de éstos en contrario, pudiendo decidir el mantenimiento de la vigencia de los tratados anteriores en forma supletoria, lo que a criterio del Colegio de Abogados y Notarios procede que haga el Estado de Guatemala al ratificar dicha Convención.

Sobre este particular, la Comisión debe ser enfática en dos puntos, el primero, que ha sido criterio sentado por esta instancia parlamentaria, que es preciso para el Estado de Guatemala, mantener la vigencia y observancia del contenido del Código de Derecho Internacional Privado, primero, porque es ley de la República y segundo porque es congruente con principios consagrados en la Constitución Política de la República, en vigencia a partir del 14 de enero de 1986. Por otra parte, es inaceptable para esta Comisión, el criterio sentado por el Colegio de Abogados y Notarios, de que algunos tratados podrían "aplicarse en forma supletoria" y que esto se haría constar al momento de su ratificación, por dos razones fundamentales a saber: la primera, restaría la certeza jurídica necesaria en todo estado de Derecho, cuando no se sabe con precisión qué norma está vigente y que norma no lo está; segundo, no puede atribuirse al Ejecutivo, al momento de la ratificación, facultades que correspondería estrictamente al Organismo Legislativo, que es el encargado de la emisión normativa. Por lo anterior, se deja claramente sentado que esta Comisión no comparte el criterio expuesto en su dictamen por dicho Colegio.

- Providencias 944 y 059-93 de fecha 10 y 15 de noviembre de 1993 acompañadas de dictamen 265-93 de fecha 22 de noviembre de 1993, procedentes de la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público.

Se centra únicamente a afirmar la conveniencia del instrumento sin entrar a análisis de fondo y recomendar se recabe la opinión de la Sección de Fiscalía de esa dependencia.

- Memorando 499 de fecha 12 de diciembre de 1994, procedente de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al emitir dictamen la Dirección señala la conveniencia de que al momento de ratificarse el instrumento, se mantenga la declaración hecha, por considerarlo importante, ya que con base en dicha declaración se mantiene a la discreción del Estado de Guatemala, la entrega de sus ciudadanos.

El argumento utilizado, no es aceptable para esta Comisión, en virtud del contenido del artículo 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que estaba vigente al momento de emitirse el dictamen que se ha comentado.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

➤ Memorando número 357-2007 de fecha 7 de agosto de 2007, procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

No obstante hacer varias referencias en el desarrollo del dictamen sobre el contenido del artículo 27 de la Constitución y la duda razonable entre varios sectores involucrados sobre la procedencia de la entrega de nacionales por delitos comunes, no hace salvedad sobre el contenido de la Convención, aún cuando sí ratifica la necesidad de expresar la reserva del Estado de Guatemala, a que se ha hecho referencia anteriormente.

DICTAMEN DE LA COMISION.

Como podrán notar los señores Diputados, en las argumentaciones expuestas por las distintas dependencias consultadas, unas que emitieron opinión cuando se encontraba vigente la Constitución de 1965 y otras, las últimas, bajo la vigencia de la actual Constitución Política de la República, coinciden en la necesidad de hacer una reserva que "garantice la discrecionalidad del Estado de Guatemala", aspecto que esta Comisión no comparte, dado a que en forma reiterada ha sentado como premisa fundamental, la existencia del artículo 27 de la Constitución Política de la República y las normas vigentes del Código de Derecho Internacional Privado, que para cualquier efecto, es norma legal vigente en el ordenamiento jurídico guatemalteco.

Esta Comisión debe externar su punto de vista, en la forma siguiente:

La Comisión estima necesario mencionar el contenido del artículo 27 de la Constitución Política de la República, el cual al regular la materia de la extradición, indica que la misma se regulará por lo dispuesto en los tratados internacionales; y al respecto, la Corte de Constitucionalidad al hacer la interpretación sobre el mismo indica: ***"...esta Corte considera oportuno expresar que el artículo 27 de la Constitución de la República, que contempla lo relativo a la extradición y sujeta su regulación a lo que para el efecto se establezca en los Tratados Internacionales, puntualiza dos aspectos de esta institución, que son: la extradición activa y la pasiva; y, así, se ve que el tercer párrafo del artículo 27 citado, que preceptúa que 'Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos...'; se refiere a la extradición activa e indica que el Estado de Guatemala tiene prohibido solicitar a otro Estado la entrega de un guatemalteco, con la intención de someterlo a la justicia nacional, cuando lo esté persiguiendo por delitos políticos. En la parte siguiente de este párrafo, la Constitución refiriéndose a los guatemaltecos, contempla otro supuesto, cuando dice: '... quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero...'; como se ve, esta norma regula la extradición pasiva y tiene un carácter general y prohibitivo, que impide que los guatemaltecos sean entregados por el Estado de Guatemala a gobierno extranjero que los reclame...." Gaceta No. 35, expediente No. 458-94, página No. 31, sentencia: 21-02-95.***

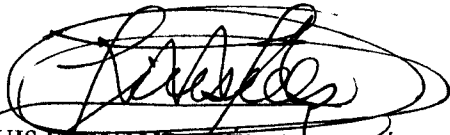
En igual forma contempla esta prohibición el artículo 345 del Código de Derecho Internacional Privado, incorporado al derecho interno guatemalteco mediante el Decreto 1575 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, que indica que los Estados contratantes no están obligados

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C.A.

entregar a sus nacionales, adicionando que la nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligado a juzgarlo, principio que igualmente es conculcado con artículos posteriores del Tratado de Extradición objeto del presente dictamen.

Luego del análisis efectuado por la Comisión de Relaciones Exteriores de este Organismo y teniendo en cuenta el contenido de la Convención Interamericana Sobre Extradición, suscrita en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, el 25 de febrero de 1981, al emitir dictamen lo hace en **SENTIDO DESFAVORABLE**, debiendo una vez aprobado éste por el Honorable Pleno, archivar el expediente respectivo.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO.


LUIS FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE COMISIÓN

MARTA ODILIA CUELLAR GIRÓN
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN


JORGE MÉNDEZ HERBRUGER
SECRETARIO DE LA COMISIÓN

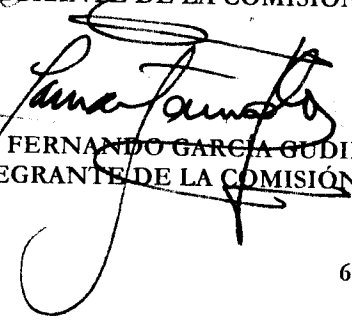

ARÍSTIDES CRESPO VILLEGAS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN


ZURY RÍOS-MONTT DE WELLER
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN


CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN


EDGAR DEDET GUZMÁN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN


JORGE MARIO BARRIOS FALLA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN


HUGO FERNANDO GARCÍA GUDIEL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

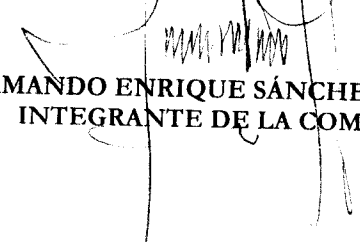
-000065-

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C.A.



MARCO ANTONIO SOLARES PÉREZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN



ARMANDO ENRIQUE SÁNCHEZ GÓMEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN



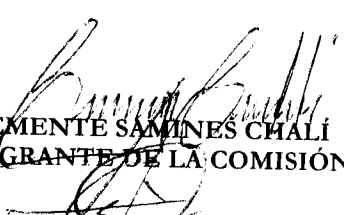
FREDY VIANA RUANO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN



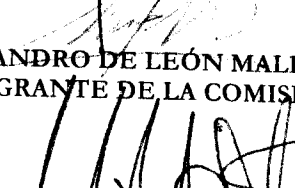
GUDY RIVERA ESTRADA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN



RUDY BERNER PEREIRA DELGADO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN



CLEMENTE SAMINES CHALÍ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN




JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN



CARLOS SANTIAGO NAJERA SAGASTUME
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN



MARIO ISRAEL RIVERA CABRERA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN



OSWALDO IVÁN ARÉVALO BARRIOS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN